MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P1A.-624

México, D. F., a 10 de septiembre de 2015.

SEN. NINFA SALINAS SADA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
P R E S E N T E

Me permito comunicar a Usted que en sesión celebrada en esta fecha, las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, y a la Comisión Especial de Cambio Climático, para que emita opinión.

Atentamente

SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
Vicepresidente
10 SEP 2015

SE TURÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

SEÑADOR ROBERTO GIL ZUARTH
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección y conservación del patrimonio natural compete a todos aquellos que se beneficien directa o indirectamente de los servicios que proveen los ecosistemas y sus procesos ecológicos dentro del Estado, es decir son de interés y responsabilidad de la sociedad y de las instituciones y autoridades, ya que todos ocupamos un lugar físico o ambiente integrado por elementos naturales y artificiales que permiten la existencia, desarrollo y subsistencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, por ello debemos respetarlo, preservarlo y cuidarlo.
Ha quedado demostrado, que el tomar medidas para proteger el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, permiten la subsistencia de toda sociedad y sustentan su desarrollo, por ello, ha sido de interés tanto de ciudadanos y de autoridades de la mayoría de los países del mundo, la necesidad de generar múltiples acciones en favor de la conservación de la diversidad biológica.

México no se ha mantenido pasivo ante la importancia del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que desde el 28 de enero de 1988, es decir que desde hace 27 años, se cuenta con una ley que regula dicho rubro, cuyo objeto principal es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.

Las disposiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son de orden público e interés social, estos principios de protección se integraron formalmente a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el quinto párrafo del artículo 4, por lo que a partir del 8 de febrero de 2012 toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado garantizará el respeto a este derecho y se generó la obligación para quien provoque un daño y deterioro ambiental de resarcirlo y de ser sancionado por la ley.

Para el Estado Mexicano, el derecho que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, se encuentra elevado al rango de un derecho fundamental, además de ser considerado como un derecho humano, ante esto, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente tienen influencia sobre la vida de todos los individuos que vivimos en el territorio nacional y que somos parte del Mundo.

El hecho de que se prevea la exigencia de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, los sujeta al "interés social" lo que implica y justifica,
en cuanto resulten indispensables, que existen las restricciones estrictamente necesarias y conducentes para preservar y mantener ese interés.

Otro aspecto importante y que tutela el Estado mexicano, es el desarrollo sustentable que se traduce en la garantía de contar con un proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, derecho que se encuentra contenido en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este proceso se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras y que se concreta en el derecho de toca persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

El Estado Mexicano constitucional y legalmente tiene la obligación de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, además de definir los principios de la política ambiental para preservar, restaurar y mejorar el ambiente y biodiversidad, así como para establecer y administrar las áreas naturales protegidas.

El establecimiento, protección, preservación y administración sustentable de las áreas naturales y de zonas de restauración ecológica se considera trascendente y de utilidad pública, por lo que la presente iniciativa trata de fortalecer dicha protección específicamente por lo que hace a las áreas naturales y sobre la necesidad de publicitar en un tiempo determinado los programas de manejo respectivos.
La fracción II del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las "Áreas naturales protegidas" son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y que estarán sujetas al régimen previsto en dicha Ley.

Tanto la Federación como las Entidades Federativas pueden establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas, con la participación de los gobiernos municipales, toda vez que el establecimiento de áreas protegidas tiene por objeto preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

Además de que mediante esta determinación, se protege la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, se asegura la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional y particularmente se resguardan las especies que están en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras y aquellas que se encuentran sujetas a protección especial.

El Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de conformidad a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, es un documento jurídico en el que encontramos claramente señalados los derechos y obligaciones que se deben de cumplir para respetar el área natural protegida, así como los aspectos técnicos de gestión de los ecosistemas y recursos naturales, la organización de las comunidades locales y la articulación programada de los intereses relevantes para el desarrollo sustentable.
Este programa es un instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida.

Dicho instrumento deberá contener entre otros elementos, la especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se ajustarán las obras y actividades que se realizarán en las áreas naturales, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Su objeto es logar la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, ya que establece, fortalece y renueva la coordinación institucional, crea los medios de participación de los diferentes actores en las políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de los objetivos de creación de las áreas protegidas.

En suma, todo programa de manejo es un proceso de planeación para la toma de decisiones e instrumentación de acciones en un área protegida que describe el entorno biofísico y socioeconómico, da un diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional, permite la planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta.

También refiere la zonificación generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso del territorio, así como los ordenamientos territoriales vigentes, genera reglas administrativas que definen los elementos normativos derivados del decreto de establecimiento del área protegida, de la categoría, la legislación, reglamentos y Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, para regular las actividades que se desarrollen en el área protegida y una evaluación de la integración funcional del sistema.

La ley que se propone reformar obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 65, a formular dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria que corresponda en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida.

La declaratoria de un área natural protegida se establece mediante un decreto que expide el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades reglamentarias y en el mismo se definen claramente los objetivos para destinar el área a la aplicación de una política ambiental, por lo tanto es el fundamento legal y jurídico de dicha área y permite brindar seguridad jurídica a las relaciones que se desarrollarán dentro de esta área.

Si bien se establece en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el plazo de un año para elaborar el programa de manejo del área natural protegida, en dicho precepto no se menciona la obligación de hacerlo del conocimiento público mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del documento completo, ignorando el motivo por el cual no se consideró importante realizar dicha publicación y esto pudiera deberse a que el documento en que se contiene el multicitado programa puede ser voluminoso.

No obstante, en el artículo 66 de la citada ley, que prevé los elementos que debe contener el referido programa de manejo, se salva el hecho de que un programa no sea conocido por la sociedad, al integrar en su último párrafo la obligación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de publicar en el Diario Oficial de la Federación, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano de localización del área, pero sin contener el plazo que la autoridad tiene para publicar dicho resumen.
Esta situación genera un vacío o laguna jurídica, por la ausencia en la ley de la exigencia de publicar el resumen del programa de manejo en un plazo determinado y esto afecta la certeza jurídica para el destinatario de la norma que son los gobernados y las autoridades que tendrán que aplicar la ley, lo que genera la problemática de que no se respete el área natural protegida, la falta de control y el manejo ambientalmente adecuado de la misma.

Ante estas consideraciones, se estima necesario y viable incluir en el último párrafo del artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la exigencia para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de que en un plazo determinado expresamente en la ley, se publique el resumen de los programas de manejo de áreas naturales protegidas, considerando que por la importancia del tema, dicha acción puede ser cumplida en un plazo no mayor a 30 días hábiles, después de que los mismos hayan sido formulados.

De igual forma, se propone que la falta de publicación del citado programa, será causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que sean omisos en cumplir dicha con medida.

Se estima que el efecto positivo de esta propuesta, al integrar el plazo que ha quedado mencionado, se genera al dar certeza que los resúmenes de los programas sean publicados y se pueda materializar el cumplimiento de la protección del área protegida, ya que no habrá excusa para el cumplimiento de la norma.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 66.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I.- ... a VII.- ...

La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que se haya formulado el programa de manejo respectivo, un resumen del mismo y el plano de localización del área.

La omisión de la publicación que se menciona en el párrafo que antecede, será causa de responsabilidad administrativa en términos de las leyes respectivas.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Senado de la República, el 9 de septiembre del año dos mil quince.

Suscriben

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO.

SEN. BLANCA ALCALA RUIZ.

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZALEZ.

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO.

SEN. JOSÉ ASCENCION ORIHUELA.